

	POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA	FECHA ELABORACIÓN: 12-12-2019
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 30-10-2025
	CÓDIGO: JUR – PO -001	PÁGINA: 1-1
	VERSIÓN: 3	REVISÓ Y APROBÓ: Comité CIGD Acta No 11-2025

POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA

La E.S.E. ISABU, a través de su Gerente y colaboradores, se compromete a implementar y fortalecer la defensa jurídica institucional, orientada a proteger los intereses de la entidad, prevenir la ocurrencia de daños antijurídicos y garantizar la atención oportuna y eficiente de los procesos judiciales, arbitrales y conciliatorios.

La defensa jurídica se asume como un compromiso integral que combina la prevención, la gestión y el aprendizaje institucional, asegurando que los recursos públicos se administren con responsabilidad, que se reduzcan los niveles de litigiosidad, que se atiendan de manera oportuna las sentencias y conciliaciones, y que se promueva la recuperación de recursos mediante las acciones legales correspondientes.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Garantizar una defensa jurídica institucional eficaz y preventiva que proteja los intereses de la E.S.E. ISABU, reduzca el daño antijurídico, optimice el uso de los recursos públicos y fortalezca la confianza de la ciudadanía mediante la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión jurídica.

ESTRATEGIAS

- Prevención del daño antijurídico:** identificar y analizar las causas que generan litigiosidad, adoptando medidas administrativas, contractuales y asistenciales que reduzcan la ocurrencia de demandas y mejoren la seguridad jurídica de los procesos.
- Gestión integral del riesgo jurídico:** articular la defensa jurídica con la política de administración del riesgo institucional y con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), asegurando el tratamiento oportuno de riesgos de tipo legal y reputacional.
- Atención de procesos judiciales y conciliaciones:** garantizar la oportuna representación de la entidad en litigios y trámites prejudiciales, mediante la defensa técnica y el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
- Cumplimiento oportuno de decisiones judiciales:** asegurar la planeación y provisión presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones, en coordinación con la política presupuestal y financiera.
- Acciones de repetición y recuperación de recursos:** iniciar los procesos de repetición cuando proceda, con el fin de salvaguardar los recursos institucionales y fomentar la responsabilidad individual.
- Gestión del conocimiento jurídico:** analizar causas de litigios, documentar lecciones aprendidas y socializar buenas prácticas jurídicas, promoviendo la innovación y la mejora continua en la gestión legal de la entidad.
- Transparencia y rendición de cuentas:** publicar información clara y actualizada sobre la gestión jurídica y los resultados obtenidos, como parte de la rendición de cuentas institucional.

INDICADORES

- Porcentaje de reducción en la tasa de litigiosidad institucional frente al año anterior.
- Porcentaje de cumplimiento en el pago oportuno de sentencias y conciliaciones.
- Porcentaje de acciones de repetición tratadas ante los miembros del Comité de conciliación, frente a las procedentes.
- Porcentaje de planes de mejoramiento implementados a partir de hallazgos derivados de procesos judiciales.
- Porcentaje de sentencias favorables a la entidad frente al total de fallos en el periodo.